



Emiliano Galende

Al momento de escribir esta Editorial las 63 Universidades Públicas del país están sufriendo y resistiendo un ataque a su normal funcionamiento por parte del gobierno actual. Más de dos millones de alumnos universitarios, profesores y personal de administración (no docentes), más distintas instituciones de la ciencia y la investigación, resisten un fuerte desfinanciamiento de sus actividades. De no lograr revertir este ataque, en el año próximo, las universidades, sus proyectos de investigación y extensión, se verán disminuidos o eliminados. Debido al daño al conocimiento, a las instituciones de la ciencia y la innovación tecnológica, no será fácil de reparar en un futuro. Este ataque económico e ideológico al conocimiento no es solo por razones económicas, como pretende el gobierno, sino una destrucción planificada de este sector central para el desarrollo del país.

Este ataque es parte de uno mayor a la cultura nacional, los hábitos sociales, las instituciones sociales (clubes de Barrio o de fútbol), instituciones del cine, el arte, agrupaciones de jubilados, diferentes organizaciones comunitarias, el repudio de todo agrupamiento solidario de cualquier tema o proyecto. Se proclama que hay que eliminar todo “colectivismo”. Se ha dicho que el presidente pretende eliminar al Estado para liberar las fuerzas del mercado. Se trata de un objetivo

que no consiste en la desaparición del Estado Nacional, sino en cambiarlo para ponerlo a disposición de grupos económicos concentrados. Lo que quiere eliminar es el Estado Social.

El Estado se retira de su función de protección de los sectores sociales más vulnerables, a la vez que garantiza un modelo de acumulación económica en los grandes grupos económicos, que, por lo mismo, su resultado será hacer de estos monopolios el mayor poder del país. Individualismo y meritocracia: que cada uno sea responsable único de su destino personal (especialmente de sus negocios).

Es difícil que el proyecto de país que se visualiza en estas políticas logre ser viable en Argentina. Con todas sus dificultades, la sociedad argentina existe y resiste. Una sociedad sólo logra ser pacífica si integra a sus miembros, protege y apoya la vida comunitaria y ofrece un futuro en el cual cada uno pueda construir, o al menos imaginar, un proyecto de vida. Esta política de destrucción y eliminación sin duda ocasionará daños, pero el imaginario existente de entender el país como “la patria” generará fuertes defensas contra estos intentos de destrucción.

Una sociedad sin Estado nos llevaría a una sociedad pre moderna, una sociedad de individuos separados, caótica, cada uno librado a sus dolores o antojos pulsionales. No sería un Estado de Sociedad sino un Estado de naturaleza, sin Ley, sin derechos y sin constitución política. Un Estado de inseguridad permanente. Curiosamente fue Locke (1694), el creador del liberalismo y promotor de los Estados Liberales modernos, quien planteó que además de la protección de la propiedad privada, el Estado es garante de los derechos de cada individuo y de la Protección social; base por otra parte de la democracia.

Vale detenernos un poco en el sentido del liberalismo y la libertad que se proclama como ideología del actual gobierno, ya que es necesario aclarar sus mentiras. En su conocido *Ensayo sobre el entendimiento humano* Locke señala que la construcción del Yo como sujeto de conciencia, intelecto y voluntad autónoma es “defender la individualidad como trayectorias de vida personal, la historia y las instituciones que lo formaron: la cultura, la educación. Las leyes, la familia”. Esto es lo que ahora llamamos construcción de la subjetividad y lo vinculamos con la libertad vivida en sociedad. No hay en Locke un “individualismo propietario” en la sociedad. La libertad personal consiste en la mayor garantía por parte del Estado a través de las leyes, y no por el arbi-

trio de quien manda “la libertad de los hombres bajo un gobierno consiste en tener una norma fija según la cual vivir, común a cada miembro de la sociedad y validada por el poder legislativo en ella instituido”. Todo muy lejos de la actualidad que vivimos hoy, donde la vida real de grandes sectores de la población está dominada y trastocada por el plan destructivo del Estado social. El individualismo que se promueve es el del abandono por parte del Estado de toda protección social. Los riesgos presentes en la vida, aumentados en los más vulnerables (la vejez, la enfermedad, el accidente, el desempleo, la incapacidad, física o psíquica, la pobreza, etc.), dejan de ser atendidos por el Estado y cada uno debe asumir los costos de los riesgos de la vida. Curiosamente (y con voluntad de falsear la situación) este retiro del Estado se proclama como libertad.

Debemos preguntarnos cuánto está impactando esta política de gobierno sobre el campo de la Salud Mental. Cabe recordar dos funciones del Estado: como señalé en la Editorial anterior, el bienestar psíquico forma parte de lo que la OMS define como Salud: “estado de bienestar psíquico, biológico y social”. Así como un daño biológico altera la vida psíquica y social, el malestar social es quizás uno de los principales motivos de sufrimiento psíquico: pobreza, desempleo, incertidumbre sobre el futuro, desamparo social, soledad,

aislamiento social, son determinantes principales del sufrimiento psíquico, conceptos que están explicitados en el punto primero de nuestra Ley Nacional de Salud Mental. El Estado es responsable de la integración y la paz social. La atención del caos social y el consiguiente malestar psíquico solo lo garantiza el Estado a través de las políticas de Protección Social. Lo que está sucediendo es el intento del gobierno de eliminar las políticas sociales, con lo cual incrementa el desamparo junto a las distintas expresiones sintomáticas del sufrimiento psíquico. Sabemos que hay un crecimiento de la demanda de atención por salud mental y adicciones. Estas situaciones incrementan la violencia social y por lo tanto la seguridad de cada uno. La segunda función del Estado es el sostenimiento de los servicios de Salud y Salud Mental. Y estamos viendo un creciente desfinanciamiento del sector Salud. Esto incrementa el sufrimiento psíquico y agrega más violencia a la vida de “casi” todos. Conocemos muy bien que la única manera de asegurar una sociedad pacífica, en sentido amplio, es la **integración social y la igualdad**. Ambas van juntas: a mayor desigualdad se incrementa la marginación de muchos sectores y, obviamente, crece la disgregación de la sociedad y la violencia.

Gran parte de los jóvenes marginados del trabajo o el estudio y sin un futuro que pueda crear expectativas

de cambio, se vuelcan al consumo de psicotrópicos, que está pasando a ser un problema creciente de Salud en la población joven y es aprovechado por el narcotráfico (que es responsable del consumo pero a la vez es un mercado económico en plena expansión).

La mentira, el “hacer creer” más que informar, dirigida a la confusión de la población para alterar el entendimiento de las causas de su situación en la realidad, tiene “patas cortas”, ya que choca con la realidad que cada uno enfrenta.

En este choque (existen muchas experiencias que lo muestran) siempre termina imponiéndose la realidad. Una de las estrategias curiosas que utiliza el presidente es acudir a la **ucronía**, concepto no utilizado con frecuencia. **Ucronía significa el manejo del tiempo, y así como llamamos utopía a un pensamiento sobre un lugar que no existe, con ucronía hacemos lo mismo con el tiempo que no existe: lo llenamos con la imaginación.**

Ucrania es adjudicar acontecimientos a un tiempo, pasado o futuro, que no existieron, negando la realidad y los datos de la historia. Así el presidente afirma que Argentina era una potencia mundial a comienzos del Siglo XX y los políticos la destruyeron. Tiempo pasado

sin fundamento de datos históricos. Del tiempo futuro se dice que en unos años Argentina será como Irlanda, pero ocurre que varias instituciones económicas que registran y comparan los datos del desarrollo como CEPAL y Banco Mundial, nos advierten que hemos llegado a ser Haití o Sudán. Se ve que nos perdimos en la realidad del tiempo. ¡Maravillas del uso de la ucronía!

El desfinanciamiento de la Salud Pública, y por consiguiente de la Salud Mental, en momentos de un incremento de la demanda de atención, está generando daños por la pérdida de profesionales y en parte por el cierre de dispositivos de atención. Pero Salud Mental es un campo social muy amplio y en vías de una mayor institucionalización. Este campo es social, incluye a la población. La Ley 26.657 ha generado un nuevo paradigma y un nuevo imaginario sobre el sufrimiento psíquico y los modos de cuidado y atención. Esto se expresa no sólo en los profesionales que forman parte de los servicios, sino también en los pacientes que solicitan atención, sus familias y personas cercanas.

Los Servicios, los profesionales y la población (atendida y con demanda potencial de atención) forman una red nacional muy consolidada y seguramente será una barrera defensiva potente frente a los avances de esta política de destrucción. El ejemplo más cercano lo

muestra el intento del gobierno de avanzar con el cierre del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, donde profesionales de la institución, junto a todo el personal de la misma y acompañados de pacientes, ex pacientes, familias de pacientes y organizaciones de la comunidad, lograron frenar e impedir este cierre.

*Noviembre 2024*  
*Emiliano Galende*